



Notas para la Historia de la Industria Argentina

(sexta parte)

Los artículos que componen esta serie pueden consultarse en <http://www.edutecne.utn.edu.ar/historia-industria/hist-ind.html>



Autora:
 **Dra. Alicia Angélica Malatesta**
amalatesta@amet.com.ar

Desde los últimos años de la década de 1950 se desarrolla en nuestro país el tramo final de vigencia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), que concluye tras la nueva irrupción de las Fuerzas Armadas en la arena política a partir del 24 de marzo de 1976. De allí en adelante, y a lo largo de los gobiernos militares que se suceden hasta diciembre de 1983, las decisiones políticas adoptadas asestan un duro golpe a la actividad industrial. En efecto, tras las medidas político-institucionales impuestas al conjunto de la sociedad, se inicia el repliegue del Estado y la consiguiente implementación de una progresiva liberalización de los mercados y apertura externa.

Este cambio de rumbo determina una nueva orientación en el marco institucional en el que operan las empresas fabriles e impacta fuertemente en las actividades industriales, a tal punto que esos años se consideran como los de la *desindustrialización argentina*. Las condiciones imperantes inciden fuertemente en el sector fabril y, en consecuencia, es dable afirmar que se asiste a la finalización de la ISI. Desde entonces, y al coincidir el proceso señalado con el marcado deterioro de las políticas públicas destinadas a áreas tan esenciales como salud, educación, infraestructura y vivienda, se desencadena la aceleración de una marcada inequidad en el tejido social de nuestro país.

El marco internacional

En los años 70 se producen profundas transformaciones que influyen indudablemente en los escenarios económicos de cada país y también en la Argentina. Uno de estos saltos es el notable incremento en el precio del petróleo y de las materias primas en general, que provoca una balanza comercial muy positiva para nuestro país. Ello alienta algunos análisis y opiniones en favor de que el Estado reduzca su presencia y abandone la regulación en las actividades productivas, para hacer revivir rápidamente de ese modo a una Argentina esencialmente agropecuaria.

Por otra parte, se advierte la expansión a nivel mundial de las ideas monetaristas, que se popularizan en toda la América del Sur y que terminarán por sobredimensionar la estructura financiera en detrimento de la producción. Lo dicho se vincula con otro cambio decisivo, representado por el crecimiento de un mercado financiero poco regulado, con liquidez creciente para aplicar y prestar con facilidad en los países más diversos.

El marco institucional-político

A comienzos de la década de 1970 amplios sectores de nuestro país aspiraban a lograr el retorno al poder de Juan Domingo Perón. Sin embargo, tras las elecciones de 1973, el gobierno del veterano líder resulta de breve duración dado que éste falle-

ce el 1 de julio de 1974. Asume entonces la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, cuya gestión debe enfrentar un delicado panorama general caracterizado por la creciente violencia política, la marcada inflación y los resultados de la fuerte devaluación dispuesta.

Por esos días, sectores militares planean deponer a la presidenta para iniciar la destrucción de toda resistencia y la desarticulación del denominado “Estado peronista”. El clima de críticas al gobierno constitucional y los rumores de acciones militares, como así también el recrudecimiento y multiplicación de los actos de violencia política —sumado a la indiferencia de los partidos políticos más importantes ante la situación general—, allanan el camino hacia el fin de la tercera administración que encabezara Juan D. Perón.

Los hechos tienen lugar en las primeras horas del 24 de marzo de 1976, cuando la presidenta Martínez abandona la Casa de Gobierno en helicóptero y es arrestada en el Aeroparque Metropolitano, para ser trasladada posteriormente a Neuquén en calidad de detenida. En ese momento se presenta a la población el Comunicado N° 1, anunciando que el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, integrada por el teniente general Jorge Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti. Al mismo tiempo, grupos armados de civil se dirigen a numerosas fábricas para detener a delegados y activistas obreros.

Al día siguiente, Videla es oficialmente designado Presidente. Al asumir el poder afirma que se inicia un nuevo ciclo histórico cuyo propósito esencial es terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo mediante el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”. La nueva administración declara que pretende restituir los valores fundamentales de la conducción del Estado, mediante la moral, idoneidad y eficiencia, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico. La gestión de Videla se extiende hasta el 29 de marzo de 1981, cuando se designa en su lugar al general Roberto Viola. Desde el 22 de diciembre de ese año lo sucede el general Leopoldo Galtieri y, finalmente, tras el desarrollo de la guerra de las Islas Malvinas, tiene lugar la gestión del general Reynaldo Bignone. Ciertamente, cada uno de estos relevos se produce por significativas divergencias dentro de las propias Fuerzas Armadas en cuanto a los planes a llevar a cabo y, desde luego, los cambios a nivel nacional traen implícitas nuevas designaciones de gobernadores y funcionarios en las diferentes áreas.

Objetivos y acciones

Para alcanzar los objetivos del “Proceso” se deja sin efecto la Constitución Nacional, se remueve a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y se suspenden por tiempo indeterminado las actividades partidarias y gremiales. No sólo es de-

tenida la propia presidente María E. Martínez, sino que también son encarcelados numerosos ex-funcionarios, legisladores y gobernadores.

Del mismo modo, se despide y encarcela a sindicalistas y dirigentes gremiales de las fábricas, que son ocupadas por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad para detener a obreros, estudiantes, periodistas, intelectuales en general, en base a "listas negras". En cuanto a los trabajadores estatales, muchos son despedidos al aplicarse la Ley de Prescindibilidad. Paralelamente se disuelven instituciones y organizaciones culturales y estudiantiles calificadas como de tendencia marxista, se intervienen las Universidades nacionales, se cierran cátedras e instituciones y se inicia la guerra contra los grupos integrantes de las llamadas "formaciones especiales". Todo ello con el claro propósito de aplastar cualquier oposición política y sindical, y aplicar el control de la población en su conjunto.

A través de la aprobación de un Estatuto se reglamentan las funciones y atribuciones de la Junta Militar y la designación del ejercicio del Poder Ejecutivo. Éste queda a cargo de un oficial superior de las Fuerzas Armadas designado por la Junta que, para las cuestiones legislativas, cuenta con el apoyo de la denominada Comisión de Asesoramiento Legislativo. El esquema político aplicado resulta novedoso al reservar el 33 % de los cargos gubernamentales y de la administración a cada una de las Fuerzas Armadas; así, cada

El Mundial de Fútbol

En el marco de la dictadura militar, de sus graves ataques a la vida y a la libertad de las personas, del silencio obligado de los sectores opuestos a las políticas económicas y sociales, la organización y el desarrollo del Campeonato Mundial de Fútbol en el año 1978 ofrece la oportunidad para que el gobierno acalle protestas y convoque a la sociedad tras los colores nacionales. Así, cada partido y su resultado atrapa la atención general y se ubica en el centro de la escena, resultando momentáneamente opacados los graves problemas que presenta la administración militar: represión, inflación, caída de la producción industrial, deterioro salarial.

En consecuencia, desde el gobierno se apela al espíritu festivo en tiempos del Mundial, a la unidad nacional en pos del logro deportivo. De este modo, la realización del



certamen le ofrece la posibilidad de mejorar su imagen en el contexto internacional. Estas estrategias de ocultamiento se ven consagradas con el triunfo argentino en el torneo y, en consecuencia, el deporte se convierte en un instrumento en manos de la gestión castrense para obtener apoyo popular.

repartición pública se convierte en un área particular de dirección a cargo del Ejército, la Aeronáutica o la Armada.

El plan represivo

Un aspecto de gran importancia para la administración militar es el plan para derrotar a las "formaciones especiales". Para ello se pone en marcha un verdadero terrorismo de Estado y una fuerte represión, en colaboración con las fuerzas de seguridad de cada provincia y con presencia de efectivos parapoliciales.

Los alcances, características y efectos de este plan recién son conocidos por la comunidad argentina tiempo después de finalizado el Proceso, y así se sabe del planeamiento y puesta en práctica de zonas de operaciones y de centros de detención clandestinos tanto en ámbitos

militares como en espacios civiles ubicados en todo el país. La realización de interrogatorios bajo tortura, las represalias contra familiares de detenidos, la ejecución de rehenes, la apropiación de bienes, la supresión de identidad de niños nacidos en cautiverio, todo esto da lugar al surgimiento de la práctica de detención-desaparición de personas: dirigentes obreros, estudiantes, artistas, religiosos, intelectuales, periodistas y ciudadanos comunes, sospechados de tener participación o vinculación con los grupos guerrilleros. También se apresan a militantes de partidos políticos del peronismo, de la izquierda y del radicalismo.

Esas acciones, llevadas a cabo en un marco de aplicación de fuerte censura en los medios de comunicación, no son reconocidas por las autoridades militares. La represión formalizada por el gobierno al-

canza tal punto que se desencadena, paulatinamente, una especie de autoreprimenda en la población. Al mismo tiempo, el ámbito educativo —y en particular las Universidades— sufre un control extremo sobre su accionar. A las detenciones y desapariciones de integrantes de las distintas comunidades educacionales, se añade la supresión de centros de investigación, el cuestionamiento de principios de la matemática moderna, la prohibición de tratar determinados temas y estudiar a ciertos autores, y el cierre de carreras como Antropología, Psicología, Sociología, todo ello por considerarse peligroso para el “ser nacional”. Frente a estos hechos, muchos profesores, investigadores y estudiantes avanzados optan por el exilio, lo cual representa una irreparable pérdida para la ciencia y la educación argentina en su conjunto.

Todo lo dicho conforma la instauración de una represión desconocida hasta entonces, que tiñe de sangre y horror a la etapa del “Proceso de Reorganización Nacional”, caracterizada por la flagrante violación de los derechos humanos y el claro control ideológico y policial de la sociedad. Tales hechos, al ser conocidos en el exterior, movilizan fuertes reclamos por el respeto a los derechos y las libertades personales; de igual manera, provocan el nacimiento de las primeras manifestaciones en reclamo por la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos, realizadas por un grupo de mujeres que desde entonces

se conocen como las Madres de Plaza de Mayo.

El reordenamiento económico

En cuanto a las cuestiones económico-productivas, el día 2 de abril de 1976 se designa en el Ministerio de Economía a José A. Martínez de Hoz, caracterizado liberal que anuncia rápidamente un plan económico en concordancia con el nuevo orden político. El ministro y sus colaboradores inmediatos coinciden en que hay que desarticular la alta injerencia del Estado en la economía, eliminando los subsidios y promoviendo la libertad de acción de los particulares.

Así, con el propósito general de alcanzar la modernización de la economía argentina mediante importantes transformaciones que se estiman imprescindibles para alcanzar la eficiencia del sistema productivo y crear un sector exportador diversificado, se dispone la apertura económica liberalizando los mercados y los precios. Con el objetivo de acelerar la apertura y la reconversión tecnológica y, al mismo tiempo, frenar el ritmo inflacionario, estas disposiciones son acompañadas —a partir de 1979— por la aplicación de la conocida “tablita”, es decir, una tasa de devaluación prefijada. No obstante, la inflación no se detiene y es entonces cuando se apela a acrecentar el endeudamiento externo y a subvaluar el tipo de cambio.

De igual manera, desde los

tiempos iniciales del Proceso se dispone la reducción de los salarios a un nivel no conocido después del año 1935, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, de los alimentos y la marcada reducción de las inversiones y subvenciones destinadas a salud, educación y vivienda. Paralelamente se transfieren servicios estatales a las provincias sin el acompañamiento de los recursos correspondientes, y se toman abultados préstamos internacionales que incrementan la deuda externa.

La desindustrialización

A partir del inicio de la gestión de Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía, la actividad industrial debe soportar los rasgos más duros del modelo. En efecto, cambia profundamente el marco global al que debe ajustarse el desenvolvimiento de la producción fabril, que puede sintetizarse en el desmantelamiento del Estado benefactor e industrial dejando sin efecto regulaciones, subsidios y privilegios con el propósito de poner en marcha una economía moderna y eficiente.

En cuanto a la política industrial se pueden reconocer dos subperíodos: desde el inicio de la gestión militar hasta fines de 1978, y desde 1978 hasta el fin de la dictadura. En el primero se apunta al “sinceramiento de la economía” y sobresale la reducción de los aranceles de importación. En el segundo, apostando a los mecanismos propios del mercado, se implanta la

apertura externa tanto de bienes industrializados como de capitales, que ocasiona una cruda contracción de la producción y la merma en los salarios, todo ello enmarcado en la gradual eliminación de la vigencia de exportaciones subvencionadas y el desarrollo de crecientes importaciones. El objetivo de esta estrategia se orienta a fortalecer a los sectores productivos con ventajas comparativas a escala internacional, y a hacer desaparecer a los menos eficientes que precisan del auxilio del Estado para subsistir.

Ante el abrupto cambio de las reglas de juego, el panorama para la producción industrial se torna crítico y desalentador, y no tarda en manifestarse una reducción en la tasa del empleo. La aplicación de las medidas adoptadas no obtiene los resultados esperados sino que, por el contrario, acarrea notables dificultades. A modo de ejemplo, vale señalar que se registran disminuciones en la producción desde acero hasta en el rubro textil y, así, las disposiciones conducen al cierre de una cantidad creciente de empresas industriales.

La Confederación General Económica encabeza las críticas al programa económico diseñado y ejecutado en el país, pero éstas son rápidamente acalladas al disponerse el cierre de la institución. En el exterior, si bien la acción de la administración militar promueve reacciones condenatorias en el plano de los derechos humanos, capta no obstante elogios con referencia a la política económica. Aquí

es dable señalar que dentro de las acciones represivas se destacan las dirigidas hacia los activistas de los sindicatos, en particular los industriales, pues el objetivo es destruir su poder de negociación colectiva y sus mecanismos de resistencia a las decisiones gubernamentales.

“
**Desde los tiempos
 iniciales del Proceso
 se dispone la reducción
 de los salarios a
 un nivel no conocido
 después del año 1935**
 ”

Como se ha dicho, dentro de los objetivos de Martínez de Hoz se encuentra eliminar el Estado benefactor como fuerte dador de empleo y como administrador de importantes subsidios, créditos blandos, compensaciones y recursos. Las decisiones del ministro, que en su óptica conducirán a una mayor eficiencia e innovación tecnológica de las plantas industriales, en realidad entretejen una difícil situación para los sectores urbanos, en especial para la pequeña industria. Y esto se produce porque los establecimientos fabriles se ven privados de sus recursos y son sometidos a la creciente competencia de los artículos importados, con lo cual transitan el camino hacia su paralización, el despido de personal y el cierre de sus plantas.

En ese contexto, el conjunto de la actividad industrial atraviesa una severa depresión. Mientras tanto Martínez de Hoz, para alcanzar la ansiada competitividad, apuesta a captar nuevas inversiones extranjeras a las que, ya desde la legislación aprobada en 1977, concede mayores beneficios fiscales y condiciones favorables para la repatriación de divisas. Esta normativa se suma a las liberales regulaciones bancarias adoptadas anteriormente y a las elevadas tasas de interés aplicadas, muy favorables para los capitales externos, que estimulan la captación de recursos foráneos que ingresan masivamente al mercado financiero argentino como consecuencia de su apertura irrestricta.

Desde 1979 se libera a las entidades bancarias y financieras de la obligación de mantener una reserva mínima del 20 % sobre sus fondos del exterior. Ciertamente, todas estas medidas brindan los recursos necesarios para impulsar los planes del gobierno en áreas como gas, petróleo, hidroelectricidad y nuclear, que son las que se procura alentar desde el Ministerio de Economía para favorecer el desenvolvimiento de los sectores industriales ponderados como más eficientes y modernos. En realidad, el que alcanza mayor desenvolvimiento es el sector bancario y financiero, que convoca no sólo a capitales externos sino también a los inversores nacionales que ingresan al país los depósitos hechos en otros países, dado que se les ofrece la posibilidad de obtener

mayores dividendos por los altos intereses vigentes.

A fines de la década de 1970, en el contexto de una moneda sobrevaluada, las importaciones no dejan de aumentar y se desencadena un déficit comercial cada vez más marcado. Ante la creciente entrada de productos extranjeros, gran parte de la población se orienta cada vez más a la adquisición de artículos importados, que se presentan no sólo más accesibles en precio sino también más atractivos por su diseño y tecnología. En consecuencia, el consumidor se aleja cada vez más de los productos nacionales, desalentando la producción fabril local. Al mismo tiempo, el

tipo de cambio vigente no sólo induce a la compra de bienes importados sino también a viajar al exterior, en especial a Miami, centro predilecto de los turistas argentinos que en sus compras desenfrenadas popularizan el “deme dos” de cada artículo. Paralelamente la deuda externa sigue aumentando sin cesar, colocando a la economía del país en una situación general compleja y delicada que se extiende hasta el retorno de la democracia.

En ese marco general, la actividad industrial experimenta una aguda crisis caracterizada por la contracción del mercado, la disminución de la demanda de productos de fabricación nacional y

la creciente competencia de los artículos importados, a lo que se suman las altas tasas de interés locales y la situación financiera general. Lo mencionado conspira contra la rentabilidad de la producción y el desarrollo de las empresas fabriles, e impulsa el fuerte endeudamiento de las fábricas que aún continúan operando.

Ante tal situación, ciertos industriales sobreviven al iniciar su camino como financistas y especuladores. Algunas firmas en proceso de quiebra cambian varias veces de mano. Otras, para hacer frente a su endeudamiento, optan por vender parte de sus activos, y las más por cerrar líneas de producción, áreas de estudio y de proyectos futuros, contraer sus estructuras y despedir a obreros y especialistas. Muchas empresas sucumben esperando condiciones más benévolas en las deudas contraídas que les permitan sobrevivir, y algunas transforman sus antiguas dependencias en depósitos o centros de compra.

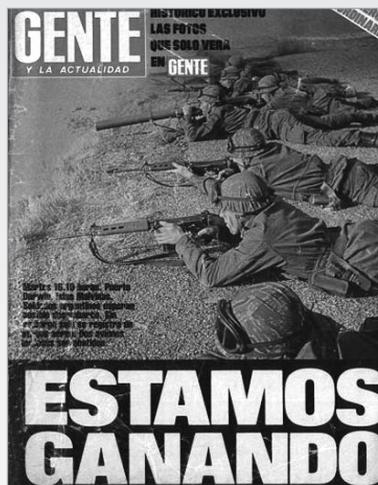
Los reclamos por la situación que atraviesan las grandes empresas son atendidos por Domingo Cavallo, sucesor de Martínez de Hoz, cuando dispone estatizar —en 1982— la deuda de gran cantidad de importantes firmas industriales, bancarias y de servicios, incrementando de ese modo la ya abultada deuda externa. Esta decisión, unida a la creciente inflación, socializó las pérdidas del sector privado al licuar las obligaciones contraídas por las grandes empresas. ✱

(Continuará)

El 2 de abril de 1982

El presidente Galtieri ordena el desembarco militar en las Islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña desde 1833. Lo sorpresivo de la acción son las victorias iniciales que consigue, que son maximizadas por los medios de comunicación y captan el fervor de la población al procurar reivindicar la soberanía argentina en esos territorios tan lejanos.

Sin embargo, rápidamente la euforia patriótica y el apoyo logrado por la figura presidencial comienzan a desvanecerse cuando se conoce el verdadero desarrollo de los acontecimientos, como así también la respuesta militar de los británicos. Posteriormente, la capitulación firmada el 14 de junio pone fin a los sueños triunfalistas, y se intensifica la reprobación de la gestión militar en cuanto a las verdaderas condiciones materiales que debieron soportar los soldados argentinos en el terreno bélico, el comportamiento de los jefes, la improvisación y la falta de



profesionalismo. Desde esos días el régimen impuesto por el “Proceso” inicia su marcado deterioro, y sectores cada vez más amplios de la sociedad reclaman el retorno a la vida republicana con plena vigencia de las libertades y garantías constitucionales.